

Popayán, 18 de marzo de 2021

Doctora:

Zulderly Rivera Angulo

Juez Octavo Administrativo del Circuito de Popayán.

E. S. D.

Asunto:	Contestación a las excepciones formuladas por la clínica La Estancia.
Radicado:	19-001-33-33-008-2020-00141-00
Demandante:	SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA Y OTROS
Demandado:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECRETARIA DE SALUD y otros

WILLIAM ANDRÉS ORDÓÑEZ BASTIDAS, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 230.816 del C.S. de la J., obrando conforme con el poder que ya consta en el proceso, de manera respetuosa me permito dar respuesta a las excepciones invocadas por la parte demandada CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. en su contestación de la demanda enviada por correo electrónico el 11 de marzo de 2021, contestación que se da dentro del término establecido en el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021. La presente contestación se surte en los siguientes términos:

I. FRENTE A LAS MANIFESTACIONES DE LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:

Dentro del expediente reposa material probatorio que demuestra la negligencia e inoportuna prestación del servicio brindado por la entidad demandada CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. a la señora MUÑOZ QUESADA, la cual no se ajustó a los parámetros de la *lex artis* documentados por la literatura científica y frente a los cuales la mencionada entidad demandada no pudo aportar ninguna contra-evidencia, por lo que me permito hacer las siguientes manifestaciones a lo contestado sobre las declaraciones y condenas:

Frente a la contestación dada a la pretensión 1, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7: Teniendo en cuenta que la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. por motivos “*Administrativos*” retrasó los exámenes y procedimientos quirúrgicos que los médicos de la entidad demandada habían solicitado como prioritarios para el tratamiento de la señora SUR MARGARITA, causaron un daño directo a la hoy demandante ya que pasó por dolores intensos y la pérdida de su pierna derecha afectando emocionalmente a todos los demandantes, por lo tanto, de conformidad con lo indicado en la demanda existe responsabilidad por parte de la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A..

Como consecuencia de ello la entidad demandada deberá realizar la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extra-patrimoniales que se han generado por su actuar.

Frente a la contestación dada a la pretensión 2: Estas se encuentran debidamente presentadas conforme con las formulas y tablas aceptadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además se ha aportado copia de los certificados de ingresos de la señora SUR MARGARITA de 2018 y 2019, su declaración de renta por dichos periodos lo cual demuestra que ella actuó de cara al Estado y además ya se aportó al proceso por parte de MEDIMÁS E.P.S. en su contestación de la demanda que la ciudadana pertenece al régimen contributivo, razón por la cual los perjuicios tasados en la demanda se encuentran debidamente sustentados y demostrados.

Frente a la contestación dada a las pretensiones 2.1. PERJUICIOS PATRIMONIALES y 2.2. POR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: Con los medios de prueba solicitados y aportados por la parte demandante se logra demostrar la responsabilidad de la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. por su actuar negligente e inoportuno al momento de prestar el servicio de salud de la señora MUÑOZ QUESADA, por lo que la entidad demandada deberá realizar la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extra-patrimoniales que se han generado por su actuar.

Frente a la contestación dada a la pretensión 2.1.1. LUCRO CESANTE Y LUCRO CESANTE FUTURO: Según la contestación de la demanda brindada por MEDIMÁS E.P.S. la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA se encuentra afiliada a dicha EPS dentro del régimen contributivo, no subsidiado como lo señaló la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A., teniendo en cuenta que MEDIMÁS como entidad promotora de salud de la demandante es quien realiza el trámite de afiliación, es ella quien conoce a qué régimen pertenece la señora SUR MARGARITA, motivo por el cual no le asiste la razón a la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. de que la demandante fuera del régimen subsidiado ni que tampoco realizara ninguna actividad económica, aún menos cuando, dentro del proceso existe prueba de los ingresos de 2018 y 2019 devengados por la señora SUR MARGARITA, como trabajadora independiente, ya que esta antes de la pérdida de su miembro inferior derecho se desempeñaba como comerciante, y sus correspondientes declaraciones de renta.

Frente a la contestación dada “a los numerales 2.2.1., 2.2.11 y 2.2.12 POR PERJUICIOS MORALES”: Se reitera que el actuar negligente y tardío de la entidad demandada dio origen al daño causado a la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA motivo por el cual existe un nexo causal entre el actuar de la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. y la pérdida del miembro inferior derecho de la demandante, por lo tanto debe responder por los perjuicios causados como consecuencia de dicho daño.

Las pretensiones de la demandante atienden a los criterios establecidos por el Honorable Consejo de Estado, frente al reconocimiento de los perjuicios morales causados a la víctima directa y a las víctimas indirectas, ya que como se puede apreciar, se ha solicitado para la señora **SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA** (víctima directa del daño), a **MYRIAN QUESADA** (madre de la víctima directa), a **INGRIT VALENTINA PIEDRAHITA MUÑOZ** (hija de crianza de la víctima directa) y a **DIANA LIZETH ROA MUÑOZ** (hija de crianza de la víctima directa), la suma de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada una de ellas, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

Y a **MARIA SENIT OBANDO QUESADA** (hermana de la víctima directa); **ANA DELIA QUESADA** (hermana de la víctima directa), y a **ÁNGELA MARÍA MUÑOZ QUESADA** (hermana de la víctima directa), las sumas equivalentes al valor de CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada una de ellas, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

Por lo que dichos valores, no sobre pasan de ninguna manera la tabla citada por la entidad demandada.

Y se trae de presente al Despacho, la regla jurisprudencial del Consejo de Estado según la cual la vulneración de derechos fundamentales hace presumir los perjuicios morales.

Frente a la contestación dada a la pretensión 2.2.2. DAÑO A LA SALUD: En el acápite “2.2.2. POR DAÑO A LA SALUD” presentado en la demanda, se evidencia que la jurisprudencia del Consejo de Estado desde 2012 ha considerado que la indemnización de perjuicios por daño a la salud puede alcanzar hasta los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad del daño causado, por lo tanto la pérdida de la extremidad inferior de la señora SUR MARGARITA ya representa un daño irreversible a sus funciones físicas, además de ello conlleva a que en el futuro y con el paso de los años, a otras complicaciones o afectaciones derivadas del desgaste de otras extremidades, como fenómenos compensatorios, que harán mella adicional en su salud y que la afectarán aún más cuando llegue a la vejez, lo cual, permite justificar la tasación de este perjuicio como grave, y por lo tanto se pueda condenar por el máximo monto permitido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que se encuentra actualizada.

Además llama la atención la manera inmisericorde en la que la CLÍNICA LA ESTANCIA trata en su contestación de la demanda a la demandante, cuando a folio 6 manifiesta que *“no se arrimó una sola prueba que diera cuenta de las supuestas secuelas padecida por la parte actora”*, refiriéndose al daño a la salud, como si la pérdida anatómica de una pierna no fuera por sí misma, prueba de un daño a la salud. Esto demuestra la cosificación e instrumentalización de que fue víctima la paciente en esta entidad demandada.

Finalmente, se solicita al Despacho que tenga en cuenta que los límites indemnizatorios del daño a la salud por lesiones graves en la integridad de la demandante, no se rigen por la regla general fijada en la sentencia del 28 de agosto de 2014 sino por la excepción de 400 SMLMV, en la misma sentencia mencionada, la cual enuncia la siguiente regla:

“Así las cosas, el daño a la salud obtiene su precisión y concreción en la medida que resulta fácil para el juez trazar parangones a partir de los precedentes judiciales de la Corporación, según los cuales a lesiones graves que afecten de manera significativa la integridad psicofísica del sujeto se otorga un máximo de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De modo que, el porcentaje de invalidez o la gravedad de la lesión y la edad de la víctima serán los factores

determinantes con los cuales el juez contará para, a partir del arbitrio judicial, fijar la indemnización del perjuicio respectivo.”

Frente a la contestación dada a la pretensión 2.2.3. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: Aplicar al presente caso medidas no pecuniarias para reparar la vida de relación dañada por la conducta de los DEMANDADOS, implicaría que la afectación de los DEMANDANTES se quedara sin reparar, y no se satisfaría el principio de reparación integral, dado que la pérdida de un miembro del cuerpo humano representa un cambio total a estilo de vida de quien la sufrió como de su familia.

Es importante advertir que la prueba del daño a la vida de relación no requiere peritación como lo enuncia la entidad demandada. Dicha tarifa legal no ha sido estipulada en ninguna norma.

II. FRENTE A LAS MANIFESTACIONES DE LOS HECHOS:

Múltiples contestaciones a los hechos de la entidad demandada se limitan a contestar de manera evasiva la demanda, ya sea con la manifestación de que lo escrito “*No es un hecho*”, o que “*No le consta*”, pese a la existencia de pruebas documentales allegadas con la demanda que si los acreditan. Este comportamiento de la CLÍNICA LA ESTANCIA debe ser tomado como un indicio en su contra.

A continuación, me permito hacer alusión a alguna de las contestaciones a los hechos, que pese a la superficialidad de la contestación de la demanda, permiten algún tipo de análisis.

Frente a la contestación dada al hecho 3: No es cierto lo manifestado por la entidad demandada toda vez que dentro de las pruebas allegadas al proceso se entregó copia de los certificados de ingresos de la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA expedidos por el contador Jorge Armando Ramos Lara, en los cuales se evidencian los ingresos de 2018 y 2019 de la hoy demandante, y sus respectivas declaraciones de renta. No se puede desconocer la actividad económica desempeñada por la señora MUÑOZ QUESADA como trabajadora independiente que cumple con sus obligaciones tributarias como comerciante.

Frente a la contestación dada al hecho 9, 9.1, 9.2, y 9.3: Contrario a lo considerado por la CLÍNICA LA ESTANCIA S.A., el contenido de los numerales enunciados corresponden a hechos relacionados con el daño sufrido por la señora MUÑOZ QUESADA como consecuencia de la indebida prestación del servicio de salud brindado por la demandadas, al no realizar los procedimientos en los términos que la ciencia ha establecido como prudenciales para prevenir el daño a la arteria poplítea y por consiguiente a la amputación de la extremidad.

La CLÍNICA LA ESTANCIA S.A., al no contestar los hechos enunciados, que hacen referencia al contenido en la literatura médica sobre daño vascular en la arteria poplítea en los casos de luxación de rodilla, pese a que esta consta en el cuaderno de la demanda y no allegar ninguna literatura que la controvierta, acepta que en el caso de SUR

MARGARITA desconoció los términos y la necesidad de prestar un servicio rápido y de calidad en la atención por cirugía vascular para evitar las consecuencias que tuvo que sufrir la hoy demandante a causa de la negligencia de la CLÍNICA LA ESTANCIA al demorarse en la valoración y cirugía de la demandante. En otras palabras está aceptando que no tuvo en cuenta la *lex artis* al momento prestar el servicio de salud cuando ingreso la paciente a su cuidado.

Frente a la contestación dada al hecho 11, 13, 14: Contrario a las apreciaciones de la entidad demandada, las transcripciones realizadas en los correspondientes hechos corresponden a los acontecimientos ocurridos en la atención brindada por las entidades demandadas a la señora SUR MARGARITA en razón del accidente que sufrió el 15 de noviembre de 2019, los cuales se encuentran consagrados en las historias clínicas que se presentaron como anexos de la demanda, motivo por el cual debieron ser contestadas por la entidad demandada y su reticencia a ser contestados debe ser tomado como un indicio en contra de la CLÍNICA LA ESTANCIA.

Frente a la contestación dada al hecho 12: El contenido del hecho en mención corresponde a lo ocurrido durante la atención que le brindó Dumian – Clínica Santa Gracia cuando ingreso al servicio. En el presente hecho se resalta la falta de celeridad en la atención de la paciente, por lo que nos encontramos ante un hecho en estricto sentido, que debió ser contestado por la entidad demandada.

Frente a la contestación dada al hecho 35: Contrario a lo referido por la entidad demandada este es un hecho en el cual se describe el estado en el cual ingreso la paciente a la clínica LA ESTANCIA, pero ello no significa que se le haya brindado una atención oportuna, debido a que no basta con la valoración, también se le debieron practicar los exámenes y procedimientos necesarios, en el tiempo que el estado de salud de la señora SUR MARGARITA lo requería.

Frente a la contestación dada al hecho 37: En el hecho en mención no se han realizado apreciaciones subjetivas, ya que, lo único que contienen son las acciones tardías realizadas por la entidad demandada la CLÍNICA LA ESTANCIA, dado que el examen que fue ordenado el 18 de noviembre de 2019 necesario para determinar el tratamiento de la paciente SUR MARGARITA tal y como se indicó en el hecho 35 de la demanda, aceptado por la demandada, fue cancelado por razones “*Administrativas*” tal y como se puede verificar en la parte final del FL. 7/456 de la H.C.

Asimismo, contiene la indicación “***SE PASA TURNO DE CIRUGÍA PRIORITARIO***”. Por lo que es claro que estamos hablando de un hecho relacionado con la conducta de la CLÍNICA LA ESTANCIA.

Téngase en cuenta, señora Juez, que al contestar el hecho 37 la CLÍNICA LA ESTANCIA no aporta prueba que desvirtúe la tardanza en la atención.

Frente a la contestación dada al hecho 38: En este hecho la entidad demandada hace una valoración equivocada y busca confundir al Despacho sobre el tiempo que

transcurrió en la atención a la señora SUR MARGARITA ya que no tuvo en cuenta que el examen que le fue practicado el 21 de noviembre de 2019, había sido ordenado desde el 18 de noviembre de 2019, siendo cancelado por motivos “*Administrativos*” (parte final del FL. 7/456 de la H.C.), por lo que no es cierto que la CLÍNICA LA ESTANCIA le haya brindado una atención oportuna a la paciente ya que pasaron 3 días y no una hora como lo dice la entidad demandada para que le fuera practicado dicho examen, el cual era necesario para la valoración y tratamiento por cirugía vascular.

Frente a la contestación dada a los hechos 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56: Estos hechos no contienen ninguna valoración subjetiva de la parte demandante, sino que relatan los procedimientos realizados por la demandada y los padecimientos de la señora SUR MARGARITA, los cuales se encuentran consagrados en la historia clínica de la entidad demandada.

La no contestación de fondo de estos hechos debe ser tomado como inicio en contra de la entidad demandada, toda vez que la parte demandante cumplió con probar los hechos enunciados con la historia clínica, la cual da plena cuenta de que no se atendió oportunamente a la paciente. Si hubo atenciones distintas que acrediten que fueron pertinentes u oportunas, estas debían ser probadas por la CLÍNICA LA ESTANCIA por su cercanía con la prueba, razón por la cual se debe aplicar la carga dinámica de la prueba.

Frente a la contestación dada al hecho 41: Es de tener en cuenta que en este hecho la entidad demandada ha aceptado que la cirugía programada a la señora MUÑOZ QUESADA, hasta el 24 de noviembre de 2019 no se había podido llevar a cabo ya que la CLÍNICA LA ESTANCIA no contaba con disponibilidad de quirófano, lo cual denota una deficiente e inoportuna prestación del servicio de salud, dado que como se ha referido en hechos anteriores la cirugía había sido descrita como prioritaria, pero por cuestiones de la administración no se llevó a cabo en el tiempo que requería la paciente para evitar el riesgo de la pérdida de su miembro inferior.

Frente a la contestación dada al hecho 54: Este hecho se encuentra probado en la HC de la Clínica La Estancia, folios 9, 21, 41, 60, 74, 90, 121, 140, 152, 185, 218, 238, 263, 291, 291, 314, 332, 344, 364, 379 y 408.

Frente a la contestación dada al hecho 58: Es un hecho que se prueba con los anexos presentados con la demanda.

Frente a la contestación dada al hecho 64: No es cierto lo que manifiesta la entidad CLÍNICA LA ESTANCIA, ya que la respuesta del 12 de junio de 2020 es sobre petición de la historia clínica, la cual es distinta a lo solicitado en el derecho de petición del 26 de febrero de 2020, descrito en el hecho 64 de la demanda, el cual no fue aportado por la mencionada demandada en su contestación, lo cual constituye indicio en su contra.

Frente a la contestación dada al hecho 66: Dentro del expediente existen pruebas de la responsabilidad de la CLÍNICA LA ESTANCIA, que tiene su origen en la negligente

prestación del servicio que le brindó a la señora MUÑOZ QUESADA, toda vez que no se realizaron los procedimientos quirúrgicos dentro de los términos para evitar que el miembro inferior derecho de la demandante le fuera amputado.

III. PRUEBAS:

3.1. Frente a la oposición de las pruebas presentada en la contestación de la demanda:

Frente a la oposición al interrogatorio de parte de los apoderados de la parte demandante a sus propios poderdantes:

Se debe iniciar por precisar que la norma citada por la entidad demandada corresponde a uno de los medios probatorios que se pueden realizar de manera extraprocesal, contenidas en los artículos 183 a 190 del capítulo II de la sección tercera del Código General del Proceso. Medio de prueba que no ha sido presentado o solicitado por la parte demandante.

Ahora bien, si hablamos del interrogatorio de parte solicitado en la demanda debemos remitirnos a las disposiciones del artículo 198 y siguientes del CGP, en particular, el inciso primero del artículo 198 indica que:

“ARTÍCULO 198. INTERROGATORIO DE LAS PARTES. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.

Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente.

Cuando se trate de incidentes y de diligencias de entrega o secuestro de bienes podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia, aun cuando hayan absuelto otro en el proceso.

Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decreta quedará notificado en estrados, no admitirá recurso, y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora señalados; la diligencia solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes.

Practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanuda la diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor.

El juez, de oficio, podrá decretar careos entre las partes.” (Negrilla fuera del texto original)

En ningún momento la norma indica que el interrogatorio de parte solamente podrá ser solicitado y practicado por el apoderado de la parte contraria, ya que, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso la confesión y el interrogatorio de parte son considerados medios probatorios independientes, debido a que el primero busca de una de las partes obtener un reconocimiento libre y espontáneo de hechos que le desfavorezcan, mientras que el interrogatorio de parte busca una manifestación libre y espontánea de los hechos experimentados por la parte, ya que ella es quien tuvo contacto directo con los hechos que dieron origen a la controversia.

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia 00323 de 2019 del proceso de radicado 11001-03-24-000-2007-00323-00A, C.P. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, resalto que:

“La doctrina nacional ha señalado igualmente que “Este medio de prueba tiene como finalidad permitir que las partes, es decir, quienes se hallan ubicados como demandantes o demandados o quienes tienen la calidad de otras partes y excepcionalmente, en casos taxativamente señalados por la ley, otros sujetos de derecho distintos de los anteriores que estén habilitados para rendir esta clase de interrogatorio, presenten su versión acerca de hechos que interesan al proceso con la posibilidad especial de que si se dan los requisitos que la ley prescribe, de su versión se estructure una confesión.”

Motivo por el cual no se puede confundir la finalidad del interrogatorio de parte con el de la confesión ya que son dos medios de prueba diferentes, que deben ser valorados por el juez de manera autónoma.

Frente a “la prueba pericial de la Junta de Calificación de Invalidez y otro”:

Si bien es cierto el artículo 211 del CPACA hace una remisión al Código General del Proceso, esta se debe hacer cuando dentro de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) no exista una disposición especial sobre la materia, dado que el artículo 218 modificado por el artículo 54 de la Ley 54 de la Ley 2080 de 2021, ha regulado la prueba pericial dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa y ha precisado que:

“Artículo 218. Prueba pericial. La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.

*Las partes podrán aportar el dictamen pericial o **solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código [...]***” (Negrilla Fuera del texto original)

No podemos hacer una remisión directa al artículo 227 del Código General del Proceso, ya que el CPACA y la modificación¹ de su artículo 218 han establecido las reglas del dictamen pericial en los procesos contenciosos administrativos, el cual podrá ser presentado o solicitado al juez.

Asimismo el artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, en su inciso 3 indica que:

“[...] Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.”

Lo que quiere decir que en los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los dictámenes periciales podrán ser presentados de manera directa o podrá solicitarse al juez que los decrete, debido a que con la demanda, siendo ese un momento procesal oportuno, se solicitó el decreto del dictamen pericial de la Junta de Calificación de Invalidez y, peritaje por psicología, estos medios probatorios se encuentran debidamente solicitados en los términos de la Ley 1437 de 2011 y, responden a pruebas conducentes, pertinente y útiles para determinar la pérdida de la capacidad de la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA y el estado emocional de la demandante, deben ser valoradas por el juez para su decreto y práctica.

Frente a la solicitud de “ratificación del contador Jorga (Sic) Armando Ramos Lara”: La entidad demandada solicita la ratificación de documentos, pero debe advertirse que esta solo sirve para ratificar autenticidad, la cual se presume en el presente caso.

Adicionalmente, si la estancia quería interrogar al contador, debió solicitarlo como prueba testimonial y no como ratificación de documentos.

IV. FRENTE A LAS EXCEPCIONES:

4.1. Nos oponemos a la excepción “INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIBLE A LA CLÍNICA LA ESTANCIA S.A., EN VIRTUD DE LA INEXISTENCIA DE ACTUACIÓN ANTIJURÍDICA IMPUTABLE Y, EN CONSECUENCIA, DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL ACTO IMPUTADO Y EL DAÑO CAUSADO”:

La conducta negligente, omisiva e inoportuna desplegada por la clínica LA ESTANCIA se ha resaltado en los hechos de la demanda debidamente soportados en la historia

¹ Vigencia: Ley 2080 de 2021, artículo 86 *“[...] Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.”*

clínica de la señora SUR MARGARITA y en las normas que obligan a las instituciones prestadoras de salud a brindar un servicio de calidad, así como también en la presente contestación a las excepciones, por lo que no le asiste la razón a la entidad demandada de que no existen los elementos que permiten evidenciar que con el actuar de la CLÍNICA LA ESTANCIA se le causó un daño a los hoy demandantes.

Es de precisar que el DAÑO que se le generó a la paciente es el que se refiere al sufrimiento que tuvo que padecer desde que fue atendida de manera inoportuna por las demandadas, el cual tuvo como consecuencia la pérdida de su miembro inferior derecho y con ello la limitación funcional, así como también los cambios en su vida y la de su familia.

Daño que fue generado por el actuar negligente de las demandadas, en el caso de la clínica LA ESTANCIA su CONDUCTA GENERADORA DEL DAÑO es que pese a las indicaciones de los médicos tratantes de dicha entidad, no se le realizaron los exámenes y procedimientos quirúrgicos que fueron solicitados de manera prioritaria, en el tiempo que era requerido dada la condición de salud de la paciente y el estado de su miembro inferior derecho, con el argumento de que por *“motivos administrativos” “falta de turno para el quirófano”* (Anotaciones que se encuentran en la HC de la CLÍNICA LA ESTANCIA), la paciente pasaba días esperando obtener una atención integral y de calidad por parte de la demandada, al tiempo que el deterioro de su pierna se iba volviendo irreversible. Es claro que su conducta demuestra que el servicio que se le brindó a la señora SUR MARGARITA no fue rápido, oportuno ni de calidad, tal y como lo demanda el artículo 195 de la Ley 100 de 1993.

En ningún momento se han hecho apreciaciones subjetivas, cada una de las afirmaciones realizadas por esta parte se han fundamentado en la historia clínica de la señora SUR MARGARITA y en instrumentos científicos como lo es la literatura médica, la cual además es fuente de derecho al tenor del artículo 230 de la Constitución de 1991, y que como se indicó en la demanda señala que en los eventos de luxación de rodilla la atención dentro de las 8 horas siguientes a la luxación, en el menor tiempo posible, aumenta ostensiblemente la posibilidad de impedir la amputación de la extremidad por el daño a la arteria poplítea, el cual es una de las principales consecuencias de esta lesión, motivo por el cual se resalta que el tiempo que tardó la CLÍNICA LA ESTANCIA en llevar a cabo los exámenes y procedimientos quirúrgicos a la paciente, hace que su atención fuese inoportuna y se derivó en la pérdida del miembro inferior derecho de la señora SUR MARGARITA e incluso puso en riesgo la vida de la misma.

No basta con simplemente escribir en la historia clínica qué exámenes y procedimientos se deben realizar, sino que estos deben ser practicados en el tiempo que las condiciones del paciente lo requiere, cosa que no sucedió en este caso, dado que en reiteradas ocasiones los médicos de la CLÍNICA LA ESTANCIA solicitaron como prioridad los procedimientos quirúrgicos de la señora MUÑOZ QUESADA, pero la administración de la entidad demandada no permitió que estos se llevaran a cabo de manera oportuna. Por lo que no hubo un manejo con criterios de oportunidad, pertinencia ni diligencia por parte de la CLÍNICA LA ESTANCIA.

Ahora bien, con respecto a los protocolos y guías de los procedimientos realizados a la señora MUÑOZ QUESADA, si la demandada quería demostrar que actuó según lo indica la *lex artis*, debió aportarlos con su contestación, tal y como se solicitó por la parte demandante en la demanda, ya que con el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los proceso existe una carga dinámica de la prueba la cual se resume en que las pruebas que se encuentren en poder de cada parte deberán ser aportadas al proceso.

Se resalta la sentencia citada por la parte demandada, la T-345 del 14 de junio de 2013, MP María Victoria Calle Correa, en su siguiente aparte:

“[...] para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, prima facie, el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente.”

Ya que el actuar de la CLÍNICA LA ESTANCIA desconoció los criterios de sus propios médicos, pues estos tuvieron que reiterar la necesidad y prioridad del estado de salud de la señora SUR MARGARITA para que se le practicaran los exámenes y procedimientos quirúrgicos que por cuestiones administrativas no se le habían llevado a cabo, pese a que eran indispensables para evitar el daño que se le ocasionó a los hoy demandantes.

En este sentido, con el contenido de la historia clínica se puede evidenciar que existe responsabilidad por parte de la CLÍNICA LA ESTANCIA la cual se deriva de su conducta negligente e inoportuna al momento de prestarle los servicios médicos a la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA, existiendo un nexo causal entre el daño generado y la conducta desplegada por la demandada, por lo que debe responder por los perjuicios que se le ocasionaron a los demandantes.

4.2. Nos oponemos a la excepción “CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD”:

La atención de calidad, oportuna e integral, no se presume de la mera consignación en la historia clínica de los exámenes y procedimientos que se le deben practicar a los pacientes, sino que estos deben ser llevados a cabo en la medida de tiempo que el estado de salud del paciente lo requiera, motivo por el cual, si la cirugía que la señora SUR MARGARITA había sido solicitada como prioritaria no debió ser practicada a los 5 días de su solicitud, ya que la palabra “Prioritaria” en el vocablo de la lengua española significa tener prioridad sobre algo, motivo por el cual es inaudito que por razones administrativas los procedimientos prioritarios se vean estancados.

Por lo que no es cierto que la CLÍNICA LA ESTANCIA haya cumplido con las disposiciones legales que regulan el Sistema de Seguridad Social en Salud, ya que su actuar negligente ocasionó las consecuencias que está padeciendo la señora SUR MARGARITA por la pérdida de su pierna y en las cuales insidio significativamente la atención negligente que le brindó la entidad demandada.

Con todo esto, está acreditado que la CLÍNICA LA ESTANCIA vulneró los derechos de la paciente a la calidad, eficacia, eficiencia, oportunidad, continuidad e integralidad en la atención de salud, a los cuales se encontraba obligada a respetar y atender, pero que con sus omisiones desconoció por completo, lo cual implica un incumplimiento de sus deberes, obteniendo como resultado de la amputación y las complicaciones de salud de la paciente.

4.3. Nos oponemos a la excepción “INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL PERJUICIO ALEGADO”:

Toda vez que dentro del proceso existen medios de prueba documentales ya aportados, y otros que se encuentran pendientes de decreto y practica por parte del Despacho, los cuales permiten acreditar la magnitud de los perjuicios sufridos por la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA que inician con los dolores que tuvo que soportar por su inoportuna atención clínica y prolongada estancia hospitalaria, y pasaron a la pérdida de su miembro inferior derecho, el cual es un perjuicio que se encuentra notoriamente probado y que de él se derivan otros que afectan a los demandantes.

Motivo por el cual no es cierto que no existan pruebas que acrediten los perjuicios causados por la entidad demandada debido a su actuar negligente e inoportuno al momento de prestar su servicio de salud a la señora SUR MARGARITA, pues estos se encuentran demostrados en la historia clínica.

Por otra parte es de resaltar, que las sumas solicitadas en la demanda atienden a los criterios que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha tenido para el reconocimiento de los perjuicios por responsabilidad médica, por lo que resulta humillante la afirmación de la entidad demandada cuando indica que “es obvia la actitud reprochablemente oportunista de la parte actora, quien no disimula su ambicioso afán de lucrarse, lo que constituiría un enriquecimiento injustificado a su favor”, pues esta es una apreciación subjetiva que no atiende a la realidad del proceso, manifiesta un claro desdén por la dignidad de la paciente que afectaron, y con la cual solo se pretende afectar la imagen de la parte demandante quien solo busca el amparo de sus derechos como víctima del actuar negligente de las demandadas.

4.4. Nos oponemos a la excepción “GENÉRICA O INNOMINADA”:

No existen causas que permitan exonerar a la CLÍNICA LA ESTANCIA de la responsabilidad patrimonial que tiene con la señora SUR MARGARITA y los demás demandantes, ya que el actuar negligente de la IPS conllevó a que la demandante perdiera su extremidad inferior derecha, lo cual se hubiese podido evitar si la demandada

hubiese cumplido sus obligaciones y hubiera prestado un servicio de calidad, eficiente e integral, dentro de los términos requeridos por la patología de la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA.

V. FRENTE A LAS SOLICITUDES HECHAS POR LA DEMANDADA:

De manera respetuosa, solicito al señor Juez que se abstenga de acceder a las solicitudes realizadas por la entidad demandada la CLÍNICA LA ESTANCIA toda vez que esta como consecuencia de su conducta negligente e inoportuna es responsable por los daños generados a la parte demandante, y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda.

VI. PRUEBAS CUYO DECRETO Y PRACTICA SE SOLICITA:

De manera respetuosa solicitamos al Despacho que decrete la prueba por informe a la clínica LA ESTANCIA S.A., al tenor de los artículos 275, 276 y 277 del CGP, para que esta absuelva las siguientes preguntas:

- 6.1.1. De manera verificable documentalmente se nos informe en qué fecha se llevó a cabo el examen de *“ANGIOGRÁFICO Y ECOGRÁFICO PARA ESTADIFICAR NIVEL Y ESTADO DE LA LESIÓN”*, a la señora SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA.
- 6.1.2. Que informe de manera verificable documentalmente cuales son los protocolos que deben seguir los médicos de la CLÍNICA LA ESTANCIA en caso de presentarse un paciente con luxación de rodilla.
- 6.1.3. Que se aporte copia del protocolo que tenga establecido la CLÍNICA LA ESTANCIA para la atención de luxación de rodilla.
- 6.1.4. Que aporte copia del reglamento, protocolo, manual o política de seguridad del paciente para el caso concreto de luxación de rodilla que tenga establecido la CLÍNICA LA ESTANCIA para evitar que una lesión arterial como consecuencia de la luxación termine en amputación de la extremidad.
- 6.1.5. En caso de que no tengan ni protocolo ni manual o política de seguridad del paciente enunciada en el numeral anterior, que se informe y aporte copia del protocolo que se siguió para la atención de la paciente SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA.

Agradezco su atención.

Atentamente.



William Andres Ordoñez Bastidas

C.C. 1.061.734.734

T. P. 230.816 C. S. de la J.

RV: Contestación excepciones CLÍNICA LA ESTANCIA 2020-00-141-00

Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <jadmin08ppn@notificacionesrj.gov.co>

Mar 23/03/2021 1:40 PM

Para: Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co> 1 archivos adjuntos (356 KB)

20210318 Contestación de excepciones formuladas por CLÍNICA LA ESTANCIA.pdf;

De: William Andres Ordonez Bastidas <willaob@hotmail.com>**Enviado:** jueves, 18 de marzo de 2021 12:28 p. m.**Para:** Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <jadmin08ppn@notificacionesrj.gov.co>**Cc:** serranoescobar@gmail.com <serranoescobar@gmail.com>**Asunto:** Contestación excepciones CLÍNICA LA ESTANCIA 2020-00-141-00

Popayán, 18 de marzo de 2021

Doctora:

Zulderly Rivera Angulo

Juez Octava Administrativo del Circuito de Popayán.

E. S. D.

Asunto: Contestación a las excepciones formuladas por la clínica La Estancia.

Radicado: 19-001-33-33-008-2020-00141-00

Demandante: SUR MARGARITA MUÑOZ QUESADA Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECRETARIA DE SALUD y otros

WILLIAM ANDRÉS ORDÓÑEZ BASTIDAS, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 230.816 del C.S. de la J., obrando conforme con el poder que ya consta en el proceso, de manera respetuosa me permito dar respuesta a las excepciones invocadas por la parte demandada CLÍNICA LA ESTANCIA S.A. en su contestación de la demanda enviada por correo electrónico el 11 de marzo de 2021, contestación que se da dentro del término establecido en el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021.

Adjunto me permito remitir el memorial de contestación de excepciones suscrito.

Agradezco su atención

Atentamente

William Andrés Ordóñez Bastidas

C.C. 1.061.734.734

23/3/2021

Correo: Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan - Outlook

T.P. 230.816 del C. S. de la J.
Apoderado parte demandante